LA REPRESIÓN FRANQUISTA DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES EN CATALUNYA. EL CASO DE LA CÁRCEL DE LLEIDA.

Robert Duró Fort

Introducción

Los funcionarios de prisiones, como todos los del bando republicano, que sirvieron en la zona leal durante la guerra, fueron objeto de la represión franquista. En el mejor de los casos esta represión se limitaba a un expediente de depuración, a los que fueron sometidos con resultado favorable o desfavorable todos los funcionarios, pero fueron mucho más duros el exilio, los encarcelamientos, las largas condenas y, en algunos casos, la pena de muerte.

La realización de un estudio sobre la cárcel de Lleida durante la Guerra Civil ¹ despertó mi interés por la suerte que corrieron sus funcionarios tras la victoria franquista ya que la documentación que iba apareciendo en diversos archivos confirmaba que la plantilla de la cárcel de Lleida había sido represaliada en su gran mayoría.

A partir de la historia de los funcionarios que prestaron servicio en la cárcel de Lleida y después de la ocupación de esta ciudad por el ejército rebelde, prosiguieron en Solsona, se ha elaborado una visión que ejemplifica la represión que sufrió el Cuerpo de Prisiones en todo el país. A través de la trayectoria de algunas de estas personas durante la guerra y su posterior represión, nos haremos a la idea de los problemas que tuvieron que atravesar hasta llegar a convertirse paradójicamente en “carceleros encarcelados”.

En Catalunya, además de los miembros del cuerpo estatal de prisiones, esta represión se hizo extensiva a los funcionarios de *Serveis Correccionals i de Readaptació de la Generalitat*, el organismo autonómico que tenía la jurisdicción i el control sobre las prisiones en el territorio catalán.

El estatuto de autonomía de 1932 había previsto el traspaso al gobierno catalán de las competencias en materia penitenciaria pero no fue hasta después del estallido de la guerra civil que esas competencias tomaron cuerpo. En agosto de 1936, se creó el *Comité de Serveis Correccionals*, que más tarde en julio de 1937, y de manera definitiva, pasaría a llamarse *Direcció General de Serveis Correccionals i de Readaptació* ². Este organismo que dependía de la conserjería de Justicia de la Generalitat tenía el control sobre las cárceles catalanas

¹ Robert DURÓ FORT, “El preventori judicial de Lleida-Solsona, 1937-1939”, en *Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo*, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 180-192.

² Pere BOSCH GIMPERA, *Memòries*, Barcelona, Edicions 62, 1980, p. 290

con la excepción que las que controlaba el SIM y el gobierno central. Con la creación del cuerpo autonómico de prisiones los funcionarios leales al gobierno republicano que servían en el cuerpo estatal fueron transferidos a la Generalitat. Al mismo tiempo, y para suplir las bajas y las movilizaciones, y para la organización de un mejor servicio se decretaron las convocatorias oportunas para proveer las plazas necesarias en este nuevo cuerpo.

La cárcel de Lleida

La cárcel de provincial de Lleida era una prisión de tipo celular que en 1936 contaba con unos 50 años de antigüedad. Estaba distribuida en 57 celdas que albergaban, en condiciones normales, de 60 a 100 prisioneros, aunque durante la guerra se superó a los 500 en varias ocasiones.

Al iniciarse la guerra la plantilla estaba compuesta por cinco oficiales, un guardia, una celadora para las mujeres, un maestro, un médico, el director y el administrador. Con el estallido de la revolución y el consiguiente vacío de poder un comité se hizo cargo del control de la cárcel sin que hubiera ninguna variación en la plantilla aunque en los primeros momentos algunos milicianos hicieron guardias en el interior de la cárcel³. La gran afluencia de detenidos desbordó el funcionamiento normal del centro penitenciario, de modo que las peticiones de refuerzos por parte de la dirección del establecimiento serán constantes.

En enero de 1937, el gobierno de la Generalitat hizo los primeros cambios en la plantilla y destituyó al director Joaquín Morcillo y al administrador Julio Aragonés, apartándolos del cuerpo de *Serveis Correccionals*. Se había llegado a esta decisión después de dos visitas de inspección y varias denuncias contrastadas sobre graves negligencias en el régimen interno de la cárcel, pero sobretudo porque muchos presos fueron sacados irregularmente de la prisión y posteriormente ejecutados por grupos de incontrolados⁴. Por otra parte, y según se afirmaba en el informe del *Comité de Serveis Correccionals* había otras graves deficiencias como la mala calidad de los alimentos o la total falta de higiene y atención en la enfermería⁵. Finalmente el texto aclaraba que el director y el administrador estaban caracterizados por una cerrada hostilidad hacia el espíritu de la Generalitat

³ Joan SAGUÉS SANJOSÉ, *Una ciutat en guerra. Lleida durant la guerra civil espanyola (1936-1939)*, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003, pp. 285-286.

⁴ El 25 de julio de 1936 una columna de milicianos procedente de Barcelona y con destino al frente de Aragón entró en la cárcel y fusiló a 24 militares y 4 civiles. El 5 de agosto con una orden aparentemente legal se llevaron a 22 detenidos que fueron asesinados en el cementerio. En otra ocasión, el 20 de agosto un grupo de milicianos asesinó a 74 religiosos, y finalmente, el 25 de agosto otra columna anarquista asaltó la cárcel matando en sus inmediaciones a 20 presos.

⁵ "Proposta del Comité Serveis Correccionals", Barcelona, 14 enero 1937, Fondo Generalitat de Catalunya, II República. Ll. 25/7 nº 13. Arxiu Nacional de Catalunya.

de Catalunya. Al mismo tiempo se destituyó también al maestro, Arturo de Lera, y al médico José M^a Porqueres aunque se desconoce la causa por la que Arturo de Lera continuó como oficial de la cárcel hasta el último día de la guerra. Esta destitución por parte de la Generalitat ejemplifica una situación recurrente en la historia de la guerra civil, y es que el director Joaquín Morcillo fue represaliado por ambos bandos. Es decir, fue destituido por el gobierno republicano por la misma razón por la que, en un primer momento, fue encausado por el gobierno franquista ⁶. Su actuación consta en los informes que el Gobierno Civil de Lleida recogió a cerca de Morcillo y en los que antiguos reclusos declaran que el director era católico y de derechas pero se dejó llevar por elementos incontrolados tratando mal a los reclusos ⁷.

El administrador, Julio Aragonés, también fue represaliado⁸ por la misma causa por el gobierno franquista aunque, igual que sucedió con Morcillo, fue readmitido en el servicio en 1949. La readmisión de estos funcionarios se debe, seguramente, al hecho de haber permanecido pocos meses a las órdenes del gobierno republicano y quizás al hecho que ya fuesen destituidos por éste. En el caso de Julio Aragonés además de su depuración como funcionario encontramos un consejo de guerra sumarísimo de urgencia, incoado en 1938, en el que fue condenado a 6 años y 1 día de inhabilitación especial. El resumen de esta condena afirmaba del acusado que: *"(..) su actuación en dicho cargo durante la mencionada dominación (roja), si bien no se concretó en acto alguno francamente contrario a las personas se creen que en ellas se hallaban detenidas, fue en todo momento de absoluta pasibilidad frente a los desmanes cometidos por la canalla roja"* ⁹.

El resto de la plantilla experimentó nuevas variaciones, el nuevo director Joan Enric Llovera lo fue hasta julio de 1937 en que fue sustituido por Eduard Costa, un empleado de la industria de Barcelona que llegaba a su primer destino como miembro de los *Serveis Correccionals*. El oficial Joan Regués ascendió a subdirector después de pasar por una situación similar a la de Morcillo y Aragonés, siendo juzgado por los dos bandos enfrentados en la guerra civil. El Tribunal Popular de Lleida encausó a Regués en 1937 para absolverlo más tarde, mientras que, como veremos posteriormente, fue sometido a un consejo de guerra franquista y a la depuración del Cuerpo de Prisiones. Los oficiales Antonio Escrig, Marcelino Sallán y Cristóbal Pau, todos

⁶ Joaquín Morcillo fue separado del servicio definitivamente el 5 de septiembre de 1939.

⁷ Joan SAGUÉS SANJOSE, *Una ciutat en guerra...*, p. 299

⁸ Julio Aragonés fue condenado a 6 años y un día de inhabilitación especial el 13 de junio de 1939.

⁹ Expediente de Julio Aragonés Marín, Lleida 1943. Tribunal de Responsabilidades Políticas. Audiència de Lleida.

antiguos, continuaron sin cambio alguno. La opinión que de ellos tenían los reclusos de derechas era buena, algunos testigos de la posguerra afirman que: *“Era Marcelino Sallant, quien, con Cristóbal Pau tenía para los reclusos las mejores palabras de consuelo y las frases más alentadoras. Cuando cualquiera de ellos estaba de servicio, una mayor libertad se disfrutaba. Las celdas se habrían y entonces los presos se visitaban”*¹⁰. En cambio la opinión que los reclusos tenían de Narciso Garcés y Joan Regués era distinta: *“Volvían a sufrir la vigilancia y el aislamiento cuando prestaban servicio un oficial apellidado Garcés, apodado “el civilón”, o el vigilante Regués, apodado “pasos largos”, insensibles a sus dolores, autoritarios, no consentíanles la menor expansión y no recibían de ellos más que molestias y groserías”*¹¹.

Para suplir las bajas ocasionadas en la plantilla llegan a Lleida Antonio Rueda y Antonio Fort, ambos en el primer destino después de su ingreso en el cuerpo autonómico de prisiones. También llega con el cargo de jefe de Servicios José Castán, funcionario antiguo y jefe de la cárcel de Sant Feliu de Llobregat, trasladado a Lleida por la Generalitat por su presunta negligencia en una fuga de presos. En marzo de 1938 se incorporan también Ramon Sales y Antonio Mayora. En estos momentos la prisión ya contaba con 13 funcionarios de los cuales 7 habían sido nombrados directamente por la Generalitat, aunque 2 de ellos fueran antiguos.

¹⁰ José M^a ALVAREZ PALLAS, *Lérida bajo la horda 1934-1936-1938*, Lérida, Imprenta Provincial, 1941, p, 91

¹¹ José M^a ALVAREZ PALLAS *Lérida bajo...* pp. 92-93.

Evolución y represión de la plantilla de la cárcel de Lleida 1936-1938.¹²

Plantilla en agosto de 1936	Plantilla en marzo de 1938	Represión	Condena	Depuración del Cuerpo Prisiones
Joaquin Morcillo Núñez (1) (1908)	Eduard Costa Julià (1937)	si	12 años	no procede
Julio Aragonés Marín (1915)	José Castan Velázquez (1908)	si	12 años	si
Jose M ^a Porqueres Bañeres (1917)	Antonio Rueda Garcia (1937)	si	12 años	no procede
Arturo de Lera Darnell (1910)	Arturo de Lera Darnell	--	--	si
Juan Regués Bonany (1920)	Juan Regués Bonany	si	absuelto	si
Marcelino Sallán Zozaya (1915)	Marcelino Sallán Zozaya	no	no	no
Antonio Escrig Puerto (1908)	Antonio Escrig Puerto	no	no	se ignora
Cristóbal Pau Vaquer (1927)	Cristóbal Pau Vaquer	no	no	se ignora
Felix Ferrer Barber (1921)	Antonio Mayora Torrent (1938)	exilio	no	no procede
Narciso Garcés Fredes (1929)	Narciso Garcés Fredes	si	12 años	si
Rosa Teresa Gorgas (1934)	Rosa Teresa Gorgas	si	no	si
	Ramon Sales Posino (1938)	exilio	no	no procede
	Antoni Fort Duró (1937)	exilio	exilio	no procede

(1) Al lado del nombre del funcionario se indica el año de ingreso en el Cuerpo de Prisiones o de *Serveis Correccionals*.

El funcionamiento de la cárcel con esta plantilla parecía el adecuado y no se observa ninguna incidencia importante en la documentación del centro excepto la fuga del preso Francesc Pi, en enero de 1938, que costó la destitución al aspirante de *Serveis Correccionals* Pau Porta. Para complementar la información sobre el funcionamiento de la prisión contamos con un documento excepcional, un informe anónimo, del 4 de febrero de 1938, dirigido al Subsecretario de Justicia del Gobierno de la República, establecido en Barcelona, que denuncia el funcionamiento de la cárcel de Lleida y la conducta de los miembros de su plantilla¹³. En él se advierte de las irregularidades del régimen carcelario al mismo tiempo que critica abiertamente la gestión del director Eduard Costa. Por ejemplo, afirma que los presos salen de la cárcel para hablar con sus visitantes y que ningún funcionario fiscaliza los objetos que entre unos y otros se cruzan. También se dice que: “*En este Preventorio a pesar de estar prohibido se entran toda clase de bebidas alcohólicas*” o bien se describe la caída de Santander en manos franquistas diciendo que “*se celebró en el interior de la prisión con un banquete, en el que se*

¹² Cuadro de elaboración propia a partir de los documentos Ll. 53/1 nº 5 y Ll. 53/4 nº 67 del Fondo Generalitat de Catalunya, II República. Archivo Nacional de Catalunya y expedientes penitenciarios y consejos de guerra de los funcionarios.

¹³ “Informe Preventorio Judicial de Lérida” 1938, Fondo Causa General, Legajo 620/1. Archivo Histórico Nacional. Es curioso que este informe esté dirigido al gobierno de la República cuando las competencias sobre la cárcel de Lleida, como todas las de Catalunya, eran de la Generalitat.

descorcharon botellas de champán y a esa fiesta concurrieron algunos oficiales de la prisión, de los antiguos, todo ello con el consentimiento del Director". Estas afirmaciones son difíciles de creer en una etapa tan avanzada de la guerra y cuando las posteriores declaraciones de los presos hacen siempre hincapié en el hambre pasada entre rejas. Destacando otros aspectos de la cárcel, se dice que dos meses atrás salieron unas hojas clandestinas que atacaban al gobierno, editadas por unos reclusos del POUM todo ello con el consentimiento del director. Finalmente coincidiendo con las acusaciones que Costa recibirá en su consejo de guerra, aparece la figura del comandante Terry, un recluso que goza de todos los favores del director, que le permite entrar y salir a su antojo a pasear y que lleva las tareas de oficina y contabilidad de la prisión. Por lo que refiere a los funcionarios comenta que "la casi totalidad de los funcionarios de esta cárcel son antiguos y de conducta bastante dudosa", y finaliza realizando una pequeña reseña de cada uno en las que destacan los comentarios que recibe Joan Regués, del que se dice que "es un individuo de malos antecedentes y muy peligroso. En octubre de 1934 fue un verdugo para los trabajadores" o bien el calificativo que se destina al oficial Marcelino Sallán: "Individuo sospechoso, que cuenta bulos a los presos, ha estado en la cárcel por sospechoso y bulista". El resto de la plantilla solo aparece brevemente para hacer mención a su ideología política. Todo parece indicar que el misterioso informe no tuvo ninguna repercusión en la organización de la cárcel, dos meses después de su emisión no se había producido ninguna variación. El único cambio que tuvo lugar fue originado por el curso de una guerra hasta entonces todavía lejana.

La caída del frente de Aragón, en marzo de 1938, situó al ejército franquista muy cerca de Lleida. El día 27 después de un bombardeo se dio la orden de evacuar la ciudad. El desorden fue terrible y la evacuación de los prisioneros, los funcionarios y la documentación de la cárcel resultó muy difícil. Costa estaba en Barcelona para pedir instrucciones, Castán que se había hecho cargo de la cárcel trasladó a los presos a la fortaleza de Gardeny, más segura porque tenía refugios, reunió la documentación y la colocó en un tren destino a Barcelona que se ignora por completo si nunca llegó a su destino. En ese momento de confusión la plantilla sufrió una importante disgregación, los oficiales Pau, Sallán y Escrig, tres funcionarios antiguos, decidieron quedarse en la ciudad a esperar a las tropas franquistas, mientras que el resto de compañeros se presentaron nuevamente a las autoridades de la Generalitat para continuar con su servicio. Los tres funcionarios que abandonaron su cargo fueron destituidos por el gobierno catalán el día 12 de abril de 1938¹⁴. El testigo de los reclusos visto en el libro de José M^a Álvarez Pallás confirma su ideología política y demuestra que dichos funcionarios ya contaban con el favor

¹⁴ *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, número 105, 15 abril de 1938, p. 217

de los presos antes de quedarse a esperar al nuevo orden. Una ojeada en el libro de servicios de la cárcel de Lleida confirma que, el siguiente día al de la ocupación por las tropas de Franco, los tres prestan el mismo servicio en una cárcel repleta ya de prisioneros republicanos. Al mismo tiempo Marcelino Sallán se convertirá en informador de la Causa General para esclarecer los hechos ocurridos en la cárcel bajo la “dominación roja” en dos ocasiones, el 9 de noviembre de 1938 y el 4 de diciembre de 1941. Por otro lado, cabe destacar también que el mismo Sallán declarará en favor de Eduard Costa y Narciso Garcés en sus respectivos consejos de guerra.

Con media provincia de Lérida ocupada por los sublevados todas las instituciones de nivel provincial se trasladan a la ciudad de Solsona; el Cuartel general del Ejército del Este, la Audiencia Provincial, la Delegación de Orden Público y también la cárcel. En este nuevo destino es donde se reúne el resto de la plantilla evacuada de Lérida formada por Eduard Costa, Joan Regués, Arturo de Lera, Antoni Fort, Antonio Mayora, Ferran Jofre, y Rosa Teresa.

José Castán según su declaración en la Causa General, cayó enfermo hasta el mes de agosto, fecha en que fue destinado al Preventorio Judicial nº 2 de Barcelona ¹⁵, luego volvió a caer enfermo sin prestar ningún otro servicio hasta el final de la guerra. Joan Regués se trasladó a Solsona pero al cabo de poco tiempo fue ascendido a director del Correccional d’Inadaptats de Vic, dónde permaneció unos 4 meses hasta que fue nombrado director del Preventorio Judicial nº 2 de Barcelona. Antonio Rueda será trasladado a Barcelona, a la cárcel Modelo, para ser destinado nuevamente a Solsona, con la mayoría de sus compañeros de Lleida, y al cabo de poco enviado definitivamente a Barcelona donde le sorprenderá la entrada de las tropas franquistas. Antonio Mayora también fue trasladado junto con la celadora Rosa Teresa a una de las cárceles de Barcelona. Posteriormente partió hacia Francia sin que conste ninguna otra información acerca de él salvo la de su búsqueda por parte de las autoridades franquistas por su presunta implicación en la muerte de un preso de la cárcel de Lérida, en 1936, en la que estaba implicado un tal Mayora, sin especificar si era él al que buscaban. Narciso Garcés fue trasladado directamente de Lleida a Barcelona, según su declaración ¹⁶ fue obligado a evacuar la capital por los rojos y trasladado a Barcelona dónde se hallaba en el momento de su ocupación por los franquistas.

¹⁵ Este nombre corresponde a la cárcel de la Calle San Elías, habilitada para descongestionar la Modelo entonces llamada Preventorio núm. 1 de Barcelona.

¹⁶ Consejo de Guerra Narciso Garcés Fredes, 1942. Archivo Tribunal Militar Territorial Tercero.

En el mes de enero de 1939 los únicos integrantes de la plantilla de Lleida que permanecían en Solsona eran el director, Eduard Costa, el antiguo maestro Arturo de Lera, y el oficial Antoni Fort. La única información conservada a cerca de Lera es que fue dado de baja del Cuerpo de Prisiones por orden de 7 de junio de 1939¹⁷, juntamente con Rosa Teresa y Narciso Garcés, entre otros. Finalmente y después de su muerte, acaecida en 1941, su familia solicitó la revisión del expediente de depuración y se dejó sin efecto su separación del servicio acordando su admisión a efectos de derechos pasivos de su familia¹⁸.

Eduardo Costa y Antoni Fort se refugiaron en Francia, Costa regresó a España antes de finalizar la guerra, el 12 de marzo de 1939¹⁹. Las autoridades de Massanet de Cabrenys le advirtieron de la obligatoriedad de presentarse en Figueras, orden que seguramente ignoró para dirigirse a Barcelona y reencontrarse con su esposa e hijos.

Antoni Fort fue internado en el campo de refugiados francés de Bram donde coincidió, en el mismo barracón, con Ramon Sales que ya conocía de Lleida y de Solsona, mientras que en un barracón vecino estaba también Joan Regués que había huido de Barcelona. Para estos funcionarios exiliados se inicia un periplo en el que, mediante la correspondencia con sus familias, intentan reunir el máximo número de avales y declaraciones favorables de las nuevas autoridades franquistas y, especialmente, de los exreclusos, para tener las mínimas garantías de poder regresar a sus hogares sin pasar antes por la cárcel. En todos los consejos de guerra consultados aparecen avales de presos a favor de los funcionarios y en gran parte de los casos las dificultades para localizarlos una vez terminada la guerra debió ser notable²⁰. Algunos de los funcionarios más comprometidos o que tenían interpuestas denuncias tuvieron que afrontar la cárcel y un consejo de guerra, además de la oportuna depuración del Cuerpo de Prisiones que, en muchos casos, comportaba la pérdida de un empleo que normalmente tenían desde la monarquía. La huida a Francia en los últimos días de guerra en Catalunya estaba presente en varias disposiciones represoras del Servicio Nacional de Prisiones en las que se separa a los funcionarios del servicio activo por que: "*con su conducta al huir al extranjero desde Cataluña con las hordas rojo-separatistas, han demostrado ser contrarios al Glorioso Movimiento Nacional, libertador de*

¹⁷ *Boletín Oficial del Estado*, nº180, 29 de junio 1939, p. 3525

¹⁸ *Boletín Oficial del Estado*, nº 200, 19 julio 1942, p. 5396

¹⁹ Salvoconducto fronterizo expedido a Eduard Costa Julià. Archivo Familia Costa.

²⁰ Antoni Fort reunió, en verano de 1939, avales de un grupo de presos de Solsona, de dos reclusos de Lleida y el de un Canónigo Magistrado de la Seu de Urgel preso en Solsona, que testificaron en su favor. Archivo familia de Antonio Fort. En el consejo de guerra de Joan Regués aparecen dos avales, del Alcalde de Solsona y de FET y de las JONS, con un sello de salida de Le Perthús fechado el 1 de agosto de 1939.

España”²¹. Por otra parte no todos los funcionarios actuaron como Antonio Escrihuela, que en agosto de 1939, recibió la Medalla Penitenciaria de Plata porque: “hallándose prestando servicios de su cargo en territorio marxista, tuvo el acendrado patriotismo de dirigirse por instancia a la llamada Dirección General de Prisiones roja, renunciando a su empleo, dadas sus ideas contrarias e incompatibles con el nefasto régimen que imperaba, siendo dado de baja en el Escalafón por desafecto y encarcelado posteriormente”²².

La represión: los consejos de Guerra²³

La incoación de un expediente de depuración era totalmente innecesaria para los funcionarios de la Generalitat puesto que su gobierno había sido abolido desde abril de 1938, y nunca había sido reconocido por los vencedores. Aún así la represión fue casi inmediata, un claro ejemplo está en los carnés de funcionario de *Serveis Correccionals* que las tropas nacionales encontraron en las oficinas de la cárcel Modelo de Barcelona y que eran mostrados a todos los que declaraban en la Causa General para ver si podían identificar a los carceleros²⁴. El carné de Antonio Rueda, por ejemplo, está cosido en las diligencias de su consejo de guerra, el mismo procedimiento judicial por el que serán juzgados también varios de sus compañeros. De los trece funcionarios que había en la cárcel de Lleida en marzo de 1938, antes de la ocupación franquista de la ciudad, cinco fueron sometidos a un consejo de guerra sumarísimo, tres se pasaron al bando contrario sin apenas represalias y los cinco restantes corrieron la diversa suerte que ya hemos visto en el apartado anterior pero que, principalmente, estuvo marcada por la cárcel o el exilio. Estos consejos de Guerra consultados aportan importantes noticias sobre la vida en las cárceles republicanas de 1936 a 1939, pero en el caso que nos ocupa su aportación más valiosa es la que se refiere a los propios funcionarios. En el estudio de estos sumarios el primer hecho descubrimos son las circunstancias de la detención del acusado. Un ejemplo lo encontramos en el caso de Eduard Costa. Después de regresar de Francia y haber vuelto a Barcelona para emprender de nuevo su vida con su familia, el 13 de junio de 1939, en el Bar Mundial, sito en la calle Marqués del Duero, Costa es reconocido por un policía que estuvo preso en la cárcel de Lleida deteniéndole inmediatamente y conduciéndole a la cárcel

²¹ *Boletín Oficial del Estado*, nº 66, 7 marzo 1939, p.1321

²² *Boletín oficial del Estado*, nº 213, 1 agosto 1939, p. 4194

²³ Todos los consejos de Guerra consultados se encuentran en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona.

²⁴ En el Archivo Histórico Nacional. Fondo Causa General, carpeta 1904/1 se encuentran los carnés de los funcionarios. En más de una ocasión el testigo afirma no reconocer a ningún funcionario entre los carnés que le son mostrados.

de Pueblo Nuevo el 20 del mismo mes. El mismo caso le ocurre a Antonio Rueda que, el 5 de febrero, también es detenido en Barcelona por otro exrecluso que le acusó por no haber facilitado la fuga a otro recluso que también se hallaba en Lleida. Finalmente, también Joan Regués es detenido el 23 de agosto de 1939 por el policía Juan Tella Baroy, que estuvo encarcelado en Vic cuando Regués era el director de la prisión ²⁵.

Otra de las informaciones interesantes del estudio de estos consejos de guerra son los testigos proporcionados por los presos, generalmente de derechas y reconocidos por el franquismo como ex cautivos por Dios y por España. En estas declaraciones los antiguos ocupantes de las cárceles republicanas acusan a los funcionarios encausados de las privaciones y malos tratos sufridos durante la guerra, de la extrema rigidez del régimen carcelario o los abusos arbitrarios sufridos en prisión. Tales declaraciones deben tomarse con cautela puesto que, sin ánimo de dudar de ellas, a veces se convierten en el vehículo ideal para vengarse del funcionario en cuestión, y muchas de ellas solo pueden comprobarse con otros testigos similares. Del mismo modo también se encuentran numerosas declaraciones de otros reclusos que contrarrestan a las primeras y que hablan a favor del acusado negando ser objeto de malos tratos, y lo que es más interesante aportando pruebas y ejemplos de la buena disposición con los reclusos, como las que hacen referencia a la entrega extra de comida, la facilidad para traslados al hospital o la permisividad en las visitas.

De los casos consultados el que reúne más declaraciones de testigos en contra del acusado es el del director, Eduard Costa. Un total de siete presos certifican los malos tratos recibidos por Costa, dirigidos especialmente contra los reclusos de derechas. Uno de ellos declara que fue retenido durante cuatro días cuando se ya tenía su orden de libertad, y otro, por ejemplo, que fue ordenado que le sirvieran leche con amoníaco. También todos los testigos coinciden en acusar a Costa de practicar el contra-espionaje en la cárcel a través del comandante Terry, que recibía un trato preferente del director, tal y como también afirmaba el escrito anónimo de 1938. Otra de las acusaciones recibidas es que castigó a un oficial de derechas a quedarse sin café cada mañana por ser simpatizante de los reclusos de derechas. El mismo policía que detuvo a Costa afirmaba que en las disputas de presos siempre se pegaba primero a los de derechas y que éstos recibían un trato mucho más severo.

En la otra cara de la moneda se encuentran las numerosas declaraciones en su favor, un cura preso se refiere a su estancia en la cárcel diciendo que: *“gozamos de mucha libertad, la comida atendiendo la escasez de*

²⁵ Consejo de guerra de Juan Regués.

viveres que había en Lérida, era en general bastante buena y abundante”²⁶. Respecto a su actuación en la cárcel de Solsona, otro antiguo recluso explica que Costa le permitió salir de la prisión en dos ocasiones distintas para visitar a su madre enferma. También son numerosos los testigos que afirman que no recibieron ningún maltrato del director y en el mismo sentido se conserva un informe de la Guardia Civil de Lérida fechado el 16 de diciembre de 1939 que afirma: “Eduardo Costa Julia es moralmente bueno, director afiliado a la CNT, no intervino en mítines, no maltrataba a los presos de derechas y si dio facilidades para que pudiesen ser visitados, y si hubo algún atropello en la cárcel fue por el administrador rojo Regués toda vez que el Costa actuaba a las órdenes de aquél”²⁷.

En el resto de expedientes consultados no son tan abundantes los testigos acusadores de los reclusos, la mayoría de sus declaraciones son favorables pero entonces los documentos que ejercen la acusación provienen de los informes de FET y de las JONS, la Guardia Civil o los Ayuntamientos. Narciso Garcés recibe la declaración favorable de varios testigos, entre ellos Julio Aragonés, Marcelino Sallán o Félix Ferrer, todos ellos funcionarios y antiguos compañeros suyos. Por otro lado su expediente de la cárcel de Lleida concluye: “dispensó a los presos derechistas un trato áspero y desconsiderado, dirigiéndose a ellos en tono descompasado y insultante pronunciando a veces palabras soeces y blasfemias y exteriorizando su simpatía hacia la causa marxista”²⁸. En la misma situación se encuentra también José Castán que, aunque acusado gravemente por su implicación en el asesinato de unos presos de la cárcel de Sant Feliu de Llobregat en 1936, cuenta con el aval de un recluso que describe así su actuación: “interesándose cuando algún recluso caía enfermo de gran manera para que fuese evacuado al hospital, cosa que en aquellos tiempos los marxistas concedían como un verdadero privilegio”²⁹.

Otro exrecluso que declara a favor de Juan Regués dice que en su estancia en la cárcel de Lérida “recibí comida de Juan Regués Bonany, ayudando así dicho señor a los entonces cautivos por España”³⁰. El caso de este funcionario permite desvelar una acusación curiosa por lo que se refiere a la historia de la guerra. El capitán

²⁶ Declaración del sacerdote Pío Forn, incluida en el consejo de guerra de Eduardo Costa.

²⁷ Informe Guardia Civil de Lérida, 16 diciembre 1939.

²⁸ Ficha de Narciso Garcés Fredes. Fondo Centre Penitenciari de Ponent. Archivo Histórico Provincial de Lleida.

²⁹ Consejo de guerra de José Castán Velázquez.

³⁰ Consejo de Guerra de Juan Regués Bonany.

de la Guardia Civil Manuel Bravo Montero³¹ lo acusa del siguiente modo: “*Que Regues mostró su intransigencia cuando en el año 1938 el gobierno rojo autorizó los preceptos religiosos no obstante tener la orden se negó a facilitarlos*”. La acusación fue contestada por Regués diciendo que sí permitió la asistencia de los reclusos a la celebración religiosa pero que pretendía que primero anotaran su nombre en una lista para evitar que acudiesen al citado acto los prisioneros de la CNT-FAI para evitar disturbios. En contra de esta acusación cabe destacar que son muy numerosos los testigos que certifican el catolicismo de Regués, uno de ellos firmado de puño y letra por el propio obispo de Solsona, Valentín Comellas.

Entre las acusaciones recibidas por los carceleros hay una que sorprende por su singularidad, se trata de la que recibe Antonio Rueda nada menos que por haber impedido la fuga de cinco presos de Lleida pocos días antes de la toma de la capital por las tropas franquistas. Alrededor del día 27 de marzo de 1938, Rueda volvía hacia el castillo, que es a donde se habían trasladado a los presos, cuando cerca de la fortaleza se encontró a un grupo de reclusos que le manifestaron que habían salido en libertad pero no pudieron mostrarle ningún documento acreditativo de su liberación, y por eso condujo nuevamente a los presos hacia la cárcel. En su consejo de guerra se conserva el testimonio de tres reclusos que lo acusan de no permitirles la fuga, entre ellos la madre de un preso que se encontraba de visita y fue detenida igualmente, y también Antonio Gaspar Calvo el mismo agente de policía que reconoce y detiene a Eduard Costa en Barcelona. Esta acusación es la única que recibe Antonio Rueda por parte de sus exreclusos en su proceso judicial, y aunque, en estos casos, son frecuentes las denuncias por malos tratos no deja de ser curioso que un carcelero esté acusado, precisamente, de cumplir con su trabajo: evitar las fugas de los presos que tiene a su cargo.

Otro caso singular aparecido en los consejos de guerra consultados lo encontramos en el que se instruyó al funcionario Rossend Codina Ramon junto a otras tres personas. En este caso el hecho de ser funcionario de prisiones sirvió como atenuante en la causa que, por otras razones, se seguía en su contra. Codina era un funcionario de *Serveis Correccionals* que sirvió en Solsona y posteriormente en Vic. La principal acusación que se le imputaba era la de haber pertenecido al comité revolucionario que colectivizó la empresa de Barcelona en la que trabajó hasta 1937. Las declaraciones de los presos sobre este funcionario son todas favorables en referencia al tiempo que ejerció como guardián de prisiones. Para empezar, y esta es la causa que en el sumario se haga referencia a su pertenencia a los *Serveis Correccionals*, el primer testigo que declara es el

³¹ Manuel Bravo Montero era fundador de una brigada especial de la Policía de Barcelona denominada *Rondin Antimarxista*. Pese a depender del Jefe superior de Policía, esta brigada tenía una cierta autonomía y su tarea de persecución y represión se hizo tristemente célebre en la Barcelona de los primeros años 40.

mismo policía que lo detiene, el capitán de la Guardia Civil ya citado en la causa de Joan Regués, Manuel Bravo Montero. El acusado también cuenta con el testigo de otro policía detenido en Vic, César Rodrigo, secretario del capitán Bravo Montero, y finalmente, la misma hermana del capitán testifica a favor de Rossend Codina. Curiosamente, en este caso, el agente de policía encargado de la detención de Codina pone a su disposición el testigo de su hermana y de su secretario. Respecto al buen trato dispensado por este funcionario, Josefina Bravo Montero explica las atenciones que recibía cuando visitaba a su hermano en la cárcel de Vic: “(...) *se mostró siempre correcto y atento con ella sabiendo que con los demás familiares de los presos se comportaba también perfectamente*”³². A pesar de contar con esta circunstancia favorable Rossend Codina fue condenado el 21 de febrero de 1940 a 12 años y 1 día de reclusión.

Las condenas

De todos los sumarios consultados solamente uno, el instruido a Joan Regués, concluye con la absolución del acusado. En este proceso la acusación de no haber permitido la asistencia religiosa a los presos no fue suficiente motivo de condena, como tampoco lo fue su presunta implicación en las sacas de presos de 1936 de la cárcel de Lleida, dado que al parecer no se encontraba de servicio. No obstante, la sentencia absolutoria de fecha 29 de noviembre de 1939, concluye del siguiente modo: “*debemos llamar la atención respetuosamente a la autoridad la conveniencia de que se oficie a la Dirección General de Prisiones poniéndole en conocimiento que el procesado Juan Regues Bonanit ha actuado en zona roja por si el expediente administrativo que le instruyen tiene a bien decretar la inhabilitación del mencionado funcionario*”³³. Poco después, el 12 de enero de 1940, y tal como hizo notar el fallo del tribunal militar, Juan Regués fue dado de baja del Cuerpo de Prisiones.

José Castán fue condenado a muerte el día 19 de julio de 1943. Un consejo de guerra posterior, celebrado el 24 de febrero de 1944, lo condenó a la pena de 12 años de reclusión a parte de la inhabilitación absoluta para ejercer de funcionario de prisiones. Pudo salir en libertad provisional el 25 de marzo de 1944, pero fue desterrado y tuvo que trasladarse a vivir a Madrid con unos familiares³⁴.

³² Consejo de guerra de Rosendo Codina Ramon

³³ Consejo de Guerra de Juan Regués Bonany

³⁴ También un informe de FET y de las JONS de Barcelona, fechado en 1941, solicita que Eduardo Costa sea desterrado a 250 km de su domicilio.

Antonio Rueda fue condenado también a 12 años y 1 día de reclusión que no cumplió totalmente por salir en libertad condicional, seguramente, a causa de la saturación de las cárceles franquistas durante la inmediata posguerra.

Narciso Garcés fue declarado culpable y condenado a 12 años y 1 día de reclusión. Salió en libertad condicional y pese a tener su domicilio en Lleida fue desterrado a Benavarre (Huesca). El 3 de mayo de 1939 se dispuso la instrucción de su expediente de depuración que finalizó el 7 de junio del mismo año con su separación del servicio, casualmente en la misma resolución se encontraban comprendidos sus antiguos compañeros Rosa Teresa y Arturo de Lera. En el caso de la celadora Rosa Teresa no existe ningún consejo de guerra aunque al finalizar la guerra civil fue encarcelada en la prisión de mujeres de Les Corts de Barcelona. Su expediente de depuración fue incoado el 29 de abril de 1939 finalizando el ya citado 7 de junio el mismo año.

Eduardo Costa que había ingresado en la cárcel el 20 de julio de 1939, fue juzgado por el Tribunal Militar nº 2 de Lérida y condenado a 12 años. El 25 de enero de 1940 se celebró otro consejo de guerra en Barcelona que lo condenó a 12 años y 1 día de reclusión temporal. El día 5 de noviembre de 1941 obtuvo la libertad condicional en concordancia con la Redención de Penas por el Trabajo. El 6 de septiembre de 1946 fue indultado muriendo al cabo de poco tiempo en marzo de 1947.

Costa que había sido director de la cárcel de Lleida y de Solsona estuvo más de dos años en prisión entre las cárceles de Pueblo Nuevo y la Modelo, en esta última, en la abarrotada 1ª galería ejerciendo de escribiente gracias a sus conocimientos administrativos. En una carta conservada por los familiares de Eduard Costa, Ramón Riu, un abogado que defendía a los presos derechistas, manifestó: *"Mi querido amigo: deploro que aún no haya recobrado la completa libertad, pues de haberse portado como Vd. Algunos empleados sobre todo del ramo de carcelarios, muchísimos de los presos o detenidos se hubieran ahorrado días tristes y muchos disgustos"*³⁵.

Los funcionarios de prisiones fueron represaliados como el resto de funcionarios pero a causa de la condición de su trabajo, las atrocidades producidas en algunas cárceles y sobre todo, el testigo de los excautivos, tuvieron quizás más acusadores que ningún otro cuerpo de la administración republicana. En definitiva, esta visión sobre la depuración de los funcionarios de una cárcel republicana nos permite observar como tres de sus guardianes, supuestamente afectos a la causa franquista, no fueron represaliados ni sus posibles expedientes de depuración terminaron con su separación del servicio.

³⁵ Archivo familia de Eduard Costa.